

ha durado por el término de la ley, y que dentro de él se ha fallado el juicio, sin que la misma ley prescriba la pronunciaci6n de la sentencia en el último de los quince días del término: que, en fin, la citada ley de diez de Abril, no trae limitaci6n alguna sobre la suspensi6n de garantías que contiene, y en consecuencia, el motivo de la violaci6n de este recurso, se contrae á una garantía de que no gozan actualmente los quejosos.

Por las consideraciones que preceden, y en virtud del art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Bonifacio Ibarra y Crescencio Núñez, juzgados y sentenciados por la jefatura política de esta capital, á la pena de muerte, con arreglo á la citada ley de 10 de Abril de este año. Hágase saber y remítase á la Suprema Corte de Justicia para su revisi6n; sacándose precisamente las copias respectivas para la publicaci6n de este fallo, en el periódico oficial del Estado, y en el Semanario Judicial de la Federaci6n. El C. Juez de Distrito de este mismo Estado, definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó, por ante mí de que doy fé.—*J. Chavarria*.—Una rúbrica.—*Juan B. Arellano*, secretario.—Una rúbrica.

Es copia que certifico.—Durango, Noviembre 11 de 1874.—*Juan B. Arellano*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 30 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los reos Bonifacio Ibarra y Crescencio Núñez, contra el fallo del jefe político de Durango, que los juzgó como salteadores, condenándolos á la pena de muerte, conforme á la ley de 10 de Abril del corriente año.

Vista la sentencia del juez de distrito que negó el amparo á los quejosos, y todas las demas constancias que obran en autos; con fundamento de lo dispuesto en la ley de 20

de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el juez de distrito de Durango en 10 de Noviembre próximo pasado, que dice:

La justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Bonifacio Ibarra y Crescencio Núñez, juzgados y sentenciados por la jefatura política de esta capital, á la pena de muerte, con arreglo á la citada ley de 10 de Abril de este año.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arceaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 28 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado 2º de Distrito de esta Capital por el C. Felipe Robleda, en representaci6n de su esposa la Sra. Dª Manuela Guerra, contra una sentencia pronunciada por la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito.*

#### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez 2º de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el estado del presente juicio de amparo promovido por D. Felipe Robleda en representaci6n dela

Sra. su esposa D<sup>a</sup> Mariana Guerra de Robleda, es de alegar. Pasa el que suscribe á examinar las constancias que tiene á la vista, y de las que hará referencia para pedir, con fundamento de ellas, lo que en su concepto proceda.

Dos personas respetables por la posición social que ocupan: dos abogados notables de nuestro foro y de merecida consideración por mil títulos: un Tribunal respetable, como lo es la 1<sup>a</sup> Sala del Superior de Justicia del Distrito, así por las altas funciones de su ministerio, como por las dignas personas que la componen; y por último, los precedentes del negocio íntimamente ligados con el recurso interpuesto, no ménos que los intereses que se versan, han llamado la atención pública sobre este negocio.

Tras su origen el presente recurso de amparo, del de casación interpuesto por D. Alejandro Arena, del laudo arbitral pronunciado en los autos sobre disolución de la sociedad «Guerra y Arena,» resolviendo la 1<sup>a</sup> Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito:

1<sup>o</sup> Que fué legalmente interpuesto por Arena el recurso de casación contra el laudo pronunciado por el tercero en discordia en el juicio arbitral que aquel siguió con D. Felipe Robleda, como marido y apoderado de la Sra. D<sup>a</sup> Manuela Guerra.

2<sup>o</sup> Que era de casarse y se casaba dicho laudo en los números 6, 7, 15, 50, 67, 28, 64 y 65, por haberse cometido, al pronunciarse, la violación que expresan las fracciones 3<sup>a</sup> y 8<sup>a</sup> del artículo 1.616 Cód. de procedimientos.

Se hace valer como fundamento del recurso: que la 1<sup>a</sup> Sala, no obstante los pactos expuestos establecidos en las diversas escrituras de 9 de Octubre de 1863, 13 de Abril de 1867 y 3 de Enero de 1872, lo prevenido en el artículo 14 de la Constitución de la República, el rudimental principio de la no retroactividad de las leyes para que las nuevas disposiciones no vengán

á anular pactos anteriores, ha declarado la nulidad del laudo referido, violando con este fallo la garantía otorgada en el artículo 14 ya citado.

Este fundamento de aplicación retroactiva de las prescripciones del Código de procedimientos, lo amplía el Sr. Robleda ya doctrinalmente al presente caso, pues como última deducción infiere, que el Tribunal aplicó el Código de procedimientos de 15 de Setiembre de 1872, fecha muy posterior á los pactos celebrados entre los socios Guerra y Arena, constantes en las escrituras ya referidas.

Se hace cargo de otra cuestión de doctrina, acerca de la inteligencia jurídica que deba darse á la locución del artículo 14 en las palabras *juzgado, ni sentenciado*, las que en concepto del quejoso quieren decir tanto, como que no solo en lo *decisorium litis*, sino en lo *ordinatorium* quiso evitar dicho artículo la retroacción de las leyes, y prohibirla á los tribunales.—Cita, en general, que la Suprema Corte de Justicia ha declarado violado el artículo 14 de la Constitución, por haberse aplicado el Código de procedimientos del Distrito á hechos anteriores á su publicación.—En resumen, alega el Sr. Robleda que la sentencia del Tribunal Superior, ha violado en la persona de la señora su esposa, la garantía que se invoca: 1<sup>o</sup> porque ha juzgado y sentenciado por el Código de 15 de Setiembre de 1872, un hecho anterior: 2<sup>o</sup> porque ha aplicado una ley posterior que afecta y altera esencialmente el hecho mismo: 3<sup>o</sup> porque con la aplicación de la ley posterior ha violado la fé de los contratos y herido un derecho legítimamente adquirido con anterioridad.

La 1<sup>a</sup> Sala, al informar acerca del acto reclamado, ha remitido copia certificada de la sentencia que en 21 de Setiembre del corriente año pronunció, anulando varios de los puntos fallados por el juez árbitro, fundándose en que el laudo debía casarse en estas partes, por no haberse recibido el pleito á prueba, debiendo serlo, ó no haberse

permitido á las partes rendir la prueba que pretendian en el tiempo legal, no siendo opuesta á derecho (frac. 8ª del art. 1,616 Cod. de procedimientos,) y por incompetencia de jurisdiccion, etc. (frac. 8ª del artículo citado.)

Diversos precedentes y considerandos sirven de premisas, para deducir de ellos el fallo superior ya asentado. En el primero, se tuvo presente la escritura de 13 de Abril de 1867, en la que consta que la Sra. Dª Ana Furlong de Guerra, como administradora legal de los bienes de su menor hija Dª Manuela Guerra, celebró con D. Alejandro Arena una compañía universal, en cuya cláusula 12ª se previno que la expresada compañía se disolveria el 31 de Diciembre de 1872.

En el segundo, la otra escritura fecha 3 de Enero de 1872, celebrada entre la Sra. Guerra con autorizacion de su esposo el Sr. Robleda y D. Alejandro Arena, con objeto de proceder á la disolución de la referida compañía, conviniéndose entre otras cosas, que el 31 de Julio del mismo año, se cortarían todas las cuentas y se haria un inventario de todas las existencias que hubiese de la actual sociedad; procediéndose en el acto á la liquidacion de ellas: que esta liquidacion comprenderia desde el balance de Diciembre de 1865, teniendo por base la escritura de sociedad de 3 de Enero de 1872, y se practicara por dos personas del comercio, quienes antes de proceder al desempeño de su encargo, nombrarian un juez árbitro, con la facultad de resolver verbal y ejecutivamente toda cuestion que apareciera: que el día 1º de Agosto de 1872 comenzarían los liquidatarios á desempeñar su encargo, cuya liquidacion deberia estar concluida en el término de tres meses, á contar desde el referido 1º de Agosto, y en la segunda cláusula adicional se pactó, que de la resolucion dictada por el árbitro, no habria recurso de nulidad ni ningun otro.

En el cuarto, se hace referencia del acta de 10 de Diciembre de 1872, en la que los

Sres. Robleda y Arena convinieron en algunas reglas para la sustanciacion del arbitraje, y entre ellas la de que se entregarían los autos al juez árbitro, quien resolveria en los términos de la escritura, salvo si por necesidad debiera practicarse alguna diligencia indispensable, previa á la decision, siendo punto omiso en cuanto al tiempo en que debia pronunciarse el laudo.

En el quinto, que el laudo se pronunció en 6 de Octubre de 1874; que en tiempo y forma introdujo D. Alejandro Arena el recurso de casacion de las decisiones marcadas con los números citados del referido laudo, por violacion de los artículos 1,364 y 1,374, fraccion 2ª del 1,613, y 3ª y 8ª del 1,616 del código de procedimientos; y en los siguientes considerandos se examina por la 1ª Sala, la diversa naturaleza del recurso de nulidad, del de casacion introducido por el código de procedimientos: la naturaleza de la sociedad celebrada entre Arena y Robleda, pues aun suponiéndola comercial, estaba sujeto el presente caso al Código de procedimientos en materia civil, porque no habiendo, como no hay, Código de procedimientos mercantiles, ni hay ninguna ley vigente que arregle los juicios arbitrales en negocios de comercio, era preciso ocurrir al Código referido, puesto que el derecho mercantil es una excepcion del comun, y todo derecho privilegiado introducido contra las reglas generales, no debe tener lugar sino únicamente en los casos para los cuales se ha establecido. Se dice tambien, que aun cuando en la escritura de 13 de Abril de 1867 parece que se pactó el arbitraje de la Ordenanza de Bilbao, por las de 3 de Enero y 1º de Agosto de 1872 se nulificó este arbitraje, reduciéndolo á una simple liquidacion de cuentas, cuya modificacion no era ya conforme á la citada Ordenanza.

La Sala primera considera igualmente, que á la publicacion del Código de procedimientos, no solo no se habia pronunciado el laudo, sino que con anterioridad se celebró

la junta en la que se prorogó el arbitraje; por lo que es aplicable al caso el art. 1º de la ley transitoria, por no hacerse distinción entre los juicios comunes y arbitrales; y por lo mismo la aplicación del expresado Código no tiene efecto retroactivo. Y como la próroga fué consentida por las dos partes contratantes, era inútil entrar en el exámen de si era ó no nulo radicalmente el laudo por haberse pronunciado fuera del término, y si se pactó ó no la próroga sin los requisitos de la ley.

Se pasa despues en la sentencia del superior á examinar las decisiones del árbitro, correspondientes en el laudo á los números 7 y 15, y se asienta, que habiéndose convenido en las escrituras de 13 de Abril y 1º de Agosto de 1872, que este comprendería desde el balance de Diciembre de 1865, este balance era inalterable para los liquidadores y no sujeto á su exámen bajo ningún aspecto, cualesquiera que fueran los vicios ó faltas que en él se contuvieran, pues de lo contrario se destruía una de las bases de la liquidación, por lo que el tercero en discordia no pudo, como lo verificó en los números 7 y 15 de su laudo, ni examinar ni modificar sus partidas, por la razón que el propio tercero asienta, «que si por error ó por cualquiera otro motivo de sus saldos (los del balance) resultase mayor ó menor, la diferencia debía ser en daño ó provecho de la compañía.»

En los considerandos, decimos, 11 y 12 referentes á los números del laudo 28, 64 y 65, 7, 15, 50 y 67, se da la razón por qué se casó dicho laudo respecto de las decisiones del árbitro, referentes á los puntos comprendidos en dichos números; puesto que en la resolución 28 se salvó el tercero de las bases de la escritura de 13 de Abril, al determinar que la disminución de los bienes de las haciendas no disminuiría el capital de la Sra. Guerra, contra lo expresamente pactado en la expresada escritura, base de la del compromiso, extralimitándose así de sus facultades: que por las escri-

turas de Enero de 1872 y 1º de Agosto del propio año, la facultad de los contadores se limitó á liquidar únicamente la sociedad, sin que pueda darse á esta palabra mas extensión que la genuina que justificamente tiene, á saber, el desenredo y aclaración de algunas cuentas. Mas claramente se comprende, se dice, comparando lo pactado en la escritura de 13 de Abril con las citadas de 72: en la cláusula 20ª de aquella, se sujetó á la decisión de los árbitros «cualquiera diferencia sea la que fuere;» en estas no se usó de términos tan generales, sino mas restringidos y limitados. De este exámen infiere el superior, que la intension de los contrayentes fué sujetar á la decisión de los árbitros «el desenredo y aclaración de las cuentas de la sociedad;» en la que no está comprendida la de cuestiones de derecho: que así lo reconoció el tercero en el número 70 diciendo: «En este punto niega el Sr. Arena la jurisdicción del árbitro, y con razón, porque no se trata de ajustar cuentas, sino de declarar derechos, y el árbitro no tiene competencia para ello;» y como sus resoluciones 64 y 65 las funda en que el Sr. Arena está obligado á indemnizar á la compañía por tales y cuales actos suyos que le ocasionaron perjuicios, y esta cuestión de daños y perjuicios es de derecho y de las no fáciles; no tuvo por su propia opinión competencia para decidir las.

Se hace mérito de que el árbitro teniendo obligación, según las escrituras de 13 de Abril y 1º de Agosto, de pronunciar sentencia definitiva, no pudo ordenar que las cantidades de que en ellas se trata, se cargaran á Arena y se abonaran á ganancias y pérdidas, donde quedarían para que cada socio dispusiera lo que creyera de justicia respecto á la parte que le correspondiera: que el dejar al Sr. Arena la reserva de que comprobara el pago (núm. 15,) ó se esclareciera á quien debía pertenecer la diferencia: el dejar (núm. 50) á salvo los derechos de los interesados para que averiguaran á quienes pertenecía la diferencia de la cuenta de

Galainena, y aceptando como provisional la proposición del Sr. Landero, letra C., no cortó dicho árbitro de raíz el pleito, no lo decidió definitivamente, ni cumplió el único objeto y fin del arbitraje, y como reconoció que los interesados podían justificar ó averiguar sus respectivos derechos, reconoció que era necesaria la prueba, debió mandar que se rindiera, pues solo así podía cumplir con la obligación de pronunciar sentencia definitiva, solicitaran ó no aquella las partes interesadas: tanto mas notable es la falta de prueba, cuanto que en la acta de 10 de Diciembre se convino en que se practicasen las diligencias indispensables para la decisión, por lo que pudo y debió abrir el negocio á prueba. Que la falta de prueba es motivo de casación en cuanto al procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 1,616, fracción 3ª: que también lo es la falta ó incompetencia de jurisdicción, según la fracción 8ª del indicado artículo; y la extralimitación de las facultades del tercero en discordia, importa esencialmente la incompetencia de jurisdicción, porque siendo el juicio arbitral de estricto derecho, en el que la autoridad de los árbitros emana de la voluntad de los contrayentes, no puede existir jurisdicción en aquellos sino respecto de las cuestiones que se han sujetado á su fallo.

Por último, que el agravio que el laudo ha inferido á D. Alejandro Arena, es el de haberse pronunciado las citadas resoluciones, sin competencia de jurisdicción, unas por haber decidido cuestiones de derecho, otras por haberse extralimitado de las sujetas á su decisión, y otras sin haberse recibido á prueba.

Tales son, casi textualmente, los fundamentos del superior auto de la 1ª Sala para dar entrada al recurso de casación interpuesto por D. Alejandro Arena, y casar las decisiones tantas veces citadas del laudo del árbitro, Sr. Icazbalceta. Al remitir dicha superior Sala la copia de su respetable fallo, ampliando por vía de informe dichos

fundamentos, haciéndose, además, cargo de examinar por qué actos de las partes se celebró el compromiso que produjo el laudo, casado en algunas de sus resoluciones para deducir si hubo ó no la violación que se alega, dice:

Este compromiso vino por la escritura de 1º de Agosto de 1872, y no por las de 13 de Abril de 1867 y 3 de Enero del mismo año de 1872, pues en ellas las partes ni celebraron la convención en que dieron potestad al árbitro ó arbitradores para determinar la controversia que existía entre ellos, ni hicieron el nombramiento de estos, requisitos esenciales del compromiso, sino únicamente se obligaron á que sin diferencia se decidieran por este medio, es decir, no se celebró el compromiso, solo se prometió; promesa que á su vez solo daba acción para exigir que llegado el caso se realizase.

Pasado el plazo de tres meses señalado al tercero en la escritura de 1º de Agosto para pronunciar su laudo, sin que lo verificara, quedó sin efecto el referido compromiso; por esto las partes y el árbitro celebraron la junta de 10 de Diciembre de 1872, en la cual lo confirmaron prorogándose el expresado plazo de tres meses. Desde ese momento convalidó el compromiso, tomando su fuerza y valor legal; desde este momento emanó la jurisdicción con que se pronunció el laudo.

Esto supuesto, la Sala expone que procedió con rectitud al atender únicamente á esos actos para resolver si estaban sujetos, lo mismo que el laudo, al Código civil y al de procedimientos en algunos de sus artículos, cualquiera que fueran las estipulaciones en contrario de anteriores escrituras, pues pactos posteriores derogan los anteriores. Si se había hecho referencia de la escritura de 1º de Agosto y la de 3 de Enero, provino de que la una se refería á la otra, no porque en estas se celebrara el compromiso; siendo de advertirse que por un error de pluma (certificado de la secretaría, fs. 56 de este expediente de amparo,) se citó en 1º

sentencia, en el considerando segundo, la de 13 de Abril, equivocacion que fácilmente se desprende del contexto mismo de los resultados.

Extendidas estas dos escrituras con fecha posterior á la de la promulgacion del Código civil, debian por lo mismo seguirse por él, y la sentencia pudo en sus resultados segundo y tercero, aplicarlos los art. 79 y 1426 del expresado Código. Igualmente celebrada la junta de 10 de Diciembre y pronunciado el laudo, cuando ya regía el Código de procedimientos que estableció el recurso de casacion, la Sala, de conformidad con el artículo 14 de la Constitucion, debió casar alguna de sus resoluciones como lo verificó, fundándose en los artículos citados en la sentencia. De lo expuesto resulta, que la escritura de compromiso de 19 de Agosto y la acta de 10 de Diciembre, tuvieron lugar despues de publicado el Código civil, y en consecuencia bajo su imperio, y sujetos á él; y que la acta en que se dió jurisdiccion al tercero para que pudiera funcionar y pronunciar su laudo, porque concluido su término no tenía ya jurisdiccion alguna, fué celebrada despues de estar ya vigente el Código de procedimientos. Que esa acta fué la que dió fuerza al compromiso de árbitros que sin ella, no hubiera tenido este resultado práctico; y que esa acta y la sentencia dictada mucho tiempo despues, quedaron bajo el imperio del Código de procedimientos, cuyas prescripciones debieron aplicarse al caso sin ninguna retroactividad. Y agrega la 1ª Sala, que aun en el supuesto de que el laudo tomara su fuerza y valor exclusivamente de la escritura de 19 de Agosto y no de la acta de 10 de Diciembre, no es menos exacto que la sentencia es estrictamente constitucional por estar pendiente el juicio arbitral á la promulgacion del Código de procedimientos que estableció, como se ha dicho, el recurso de casacion.

La respetable 1ª Sala se hace cargo en su informe en los párrafos siguientes á los que ha extractado el que suscribe, de otras

cuestiones de derecho como son las siguientes: Que todo derecho nace de un hecho anterior, y por lo mismo las partes no tenían el de introducir el recurso indicado, sino despues de pronunciado el laudo, y, como conclusion de esta premisa, que la aplicacion que hizo del Código de procedimientos fué á un hecho posterior á su promulgacion; este hecho es el laudo, el anterior es el contrato. Que los recursos legales contra una ejecutoria, no nacen de los contratos ó de la voluntad de los contrayentes, y sí de la del legislador, supuesto que existen, quieran ó no las partes, y sin relacion íntima con el objeto y fin de los expresados contratos. Sigue diciendo el Superior, que al extenderse la escritura de 19 de Agosto, estaban los contrayentes sujetos á las leyes antiguas, que les concedian tales y cuales recursos contra el laudo que se pronunciara; pero que estos recursos no los podian interponer sino ya pronunciado, y en el momento en que existió este hecho, ya no existia el antiguo derecho, y sí uno nuevo. Consecuencia: este hecho debía regirse, para no infringir el artículo constitucional, por el derecho nuevo, vigente con anterioridad, no pudiendo ya ejercitar las partes de los recursos antiguos sino los posteriores. Infiere de esos precedentes, que la renuncia de todo recurso, lo mismo que el de nulidad contenida en la escritura de 19 de Agosto, fué nula y de ningún valor, porque por ésta se obligaron las partes á no interponerla cuando hubieran adquirido ese derecho, ó lo que es lo mismo, cuando pudieran ejercitarlo legalmente; y como esto no llegó á suceder, no podian renunciar lo que no estaba en su patrimonio, pues nadie renuncia lo que no tiene. Esta renuncia se hizo imposible por el cambio de legislacion, y á lo imposible nadie está obligado.

La Sala se hace cargo de la legislacion antigua aplicándola al recurso de nulidad, diciendo que aun segun ella, el laudo pronunciado respecto de cosas que los contrayentes no sujetaron á la decision del árbi-



tro, es nulo con nulidad radical, según disposiciones de leyes vigentes á la celebracion de la escritura de 1º de Agosto; citando las leyes 34, tít. 4º, part. 3ª y 4ª, tít. 17, lib. 11, Nov. Recop.; y como no era ya posible ejercitar esa accion por el recurso antiguo que estaba derogado, era indispensable hacerla por el nuevo, es decir, por el de casacion, sin embargo de la renuncia del de nulidad. Tras: en apoyo de lo expuesto, á mas de las leyes citadas, las doctrinas de Febrero de Tapia, tom. 4º, pág. 35, núm. 17, de Sigüenza tratado de *claus instrum.*, lib. 1º, cap. 21, § 7º, cap. 31, quienes enseñan "que cuando los árbitros han fallado sin jurisdiccion, bien porque haya espirado el término, ó bien porque lo hayan hecho excediéndose de los puntos que se hayan sujetado á su jurisdiccion procede la nulidad." Así es que en el presente caso podia pedirse la nulidad según la legislacion anterior, aun cuando se hubiera renunciado este recurso, y por lo mismo pedirse la casacion que para el objeto la reemplazó en el Código.

De cuanto ha expuesto la primera Sala, concluyo: 1º Que el compromiso se celebró por la escritura de 1º de Agosto de 1872 y nulificado por no haberse pronunciado el laudo en el plazo convenido, convalació y tomó fuerza y valor legal de la junta de 10 de Diciembre del propio año. 2º Que la Sala, al resolver si procedia ó no la casacion del laudo, debió fundarse en este, y en la escritura y junta citadas. 3º Que habiéndose celebrado la escritura despues de la promulgacion del código civil, y la junta de 10 de Diciembre y pronunciándose el laudo despues de la del de procedimientos, una y otras están sujetas respectivamente á las prescripciones de ámbos Códigos. 4º Que suponiendo sin valor la junta de 10 de Diciembre, el Código de procedimientos, no se aplicó á un hecho anterior (el contrato) sino á un posterior (el laudo). 5º Que los recursos vigentes al tiempo de la celebracion del compromiso, no constituian derecho ad-

TOMO VII.—PARTE II.

quirido, y por consiguiente las partes debian sujetarse á los nuevos. 6º Que no siendo derechos adquiridos, era imposible su renuncia, porque no se renuncia lo que no está en nuestro patrimonio. 7º Que tambien era ilegal porque las partes no pueden hacer que una sentencia dada sin jurisdiccion se repate con esa validez. 8º Que en consecuencia final, la sentencia pronunciada por la Sala 1ª con fecha 21 de Setiembre del corriente año en el recurso de casacion interpuesto por D. Alejandro Arena, del laudo arbitral dictado en los autos sobre dissolution de la sociedad «Guerin y Arena», no infringió el artículo 14 de la Constitucion. Tal es el informe de la respetable 1ª Sala.

En el término de prueba se han presentado en testimonio las constancias siguientes:

Una parte del informe del muy recomendable abogado del Sr. Robleda, D. Manuel Salico. Se contras este fragmento á poner en paralelo desventajoso la innovacion del recurso de nulidad, considerando al antiguo mas lógico que el de casacion. Se da la razon por qué se hizo expresa y especial la renuncia del recurso de nulidad en la escritura de 1º de Agosto de 1872, perdiendo el derecho otorgado por las leyes 23 y 27 tít. 4º, part. 3ª y 4ª, tít. 17, lib. 11, Nov. Recop., para buscar el remedio del laudo en la apelacion, en el albedrío de buen varon y en la nulidad de los procedimientos.

Que pretender se renunciase un recurso que la legislacion anterior al 15 de Setiembre de 1872 no conocia, es querer un absurdo jurídico, y mucho más cuando nada tenia que hacer ese recurso en materia mercantil. En cuanto al art. 1º de la ley transitoria, obrando contra él la objecion de retroactividad, es inaplicable al caso; fué dictado para normar la sustanciacion de los juicios comunes pendientes y no la de los arbitramentos sujetos á otras reglas, y mucho menos las de los arbitramentos mercantiles. Hace referencia á las ejecutorias en los negocios de Aurbet y

Plaucha, Cagniard y Delorme, y las diferencias de uno y otro caso. Concluye diciéndose por el Sr. Silveo que era improcedente el recurso, 1º: porque, atenta la naturaleza del compromiso acordado entre el Sr. Roblada y el Sr. Arena al juicio arbitral, no es de aplicarse la legislación común, sino la mercantil que no conoce el recurso de casación; 2º Porque, atenta la fecha de la escritura de arbitramento, aunque el negocio no estuviera sujeto á una legislación especial, el Código de procedimientos no sería aplicable á él sin efecto retroactivo; pues que adquiriendo un derecho, la ley no puede venir á privar de él sin violar el art. 14 de la Constitución; 3º Porque examinando con una poca de atención ese mismo Código de procedimientos, aunque el recurso que fué renunciado expresamente, no llevara el nombre de casación, era absolutamente el mismo que el antiguo de nulidad, respecto del procedimiento; y 4º Porque las leyes, las doctrinas y las ejecutorias citadas de contrario, no tienen aplicación al presente caso, ó son contraproducentes.

Testimonio de la junta de 10 de Diciembre de 1872, en la que convinieron los Sres. Arena y Roblada en lo siguiente: Que para que tuviera lugar la resolución judicial de que hablaba la segunda cláusula del convenio inserto en la escritura de 1º de Agosto de aquel año, conciliando en lo que faltaba por cumplir lo dispuesto en la cláusula quinta de esa propia concordia, los interesados ó sus contadores, ó unos y otros recibirían las operaciones practicadas en la forma que en dicha acta se expresa, en un plazo de veinticinco días improrrogables: que inmediatamente despues de esos veinticinco días útiles se entregarán los autos al señor juez-árbitro para que resolviera en los términos de la escritura las diferencias que se sometieron á su fallo, salvo el que no obstante esa depuración entre los interesados fuese necesario oírlos ó practicar alguna diligencia indispensable previa á la decisión. El señor juez aprobó este acuerdo

de los interesados, atendiendo no ser más que la compilación de puntos de diferencia, dudas y alegaciones prevista en la repetida escritura de 1º de Agosto, y recibiendo cada uno las operaciones mercantiles presentadas de que se ha hecho mérito, en la forma que estableció la capitulación primera. Esta acta fué firmado por el juez y los interesados, autorizada por el escribano público Raz Guzman.

Un auto fecha 9 de Diciembre de 1873. En este auto manifestó el árbitro tercero en cuatro considerandos, que era indispensable el nombramiento de un contador perito que se encargara del exámen material de las liquidaciones, con vista de los libros y demas documentos; que diera cuenta de sus trabajos al árbitro y practicara la liquidación definitiva de conformidad con las resoluciones que éste dictara en los puntos dudosos, sin cuyo nombramiento de contador, el repetido árbitro no podía continuar conociendo de este negocio; y en el quinto considerando manifestó que no se creía facultado para determinar ese nombramiento, pues tal facultad no se encontraba en las que daba la escritura de 10 de Agosto de 1872, y los árbitros no tenían otras que aquellas que las partes habían querido concederles. Por todo lo expuesto decretó, se notificara á las partes para que dijeran si estaban conformes en que se nombrara un contador perito, con el objeto expresado: que caso de estarlo, dijeran también si querían hacer el nombramiento de comun acuerdo ó dábase facultad al árbitro para que él lo hiciera.

En 17 de Febrero de 1874 se notificó el auto anterior á D. Alejandro Arena, quien dijo que estaba conforme en que el señor tercero en discordia nombrara el contador que deseaba, designando para desempeñar ese encargo á persona de su confianza, á fin de que esta haga las operaciones de contabilidad necesaria, para que el señor tercero en discordia pueda desempeñar las facultades que se le concedieron y confirieron en su nombramiento, sin que por esto consin-



tierra el comparante en que se examinen y dividan de nuevo aquellos puntos sobre los que ha manifestado que estaban de antemano terminados por consentimiento de los contrayentes y acerca de los cuales se ha opuesto á que se sujeten á nuevo exámen y decision.

Testimonio del auto de 5 de Diciembre de 1872, citando á junta para el dia 10 del mismo mes.

Testimonio del auto de citacion para sentencia del árbitro fecha 28 de Setiembre de 1874.

Testimonio del escrito presentado por el Sr. Robleda en 9 del corriente mes ante el juez 6º de lo civil, apelando del auto de 29 de Setiembre, dictado por el juez 1º de lo civil, por el que previno á dicho Sr. Robleda que otorgara libranza dentro de diez dias por una suma determinada.—Combate dicha determinacion y para ello hace una extensa relacion y procura probar que ha sido un error del juez 1º dar fuerza ejecutiva al fallo de la 1ª Sala que casó siete partidas del laudo del árbitro, pues que pendiente como lo está el recurso de amparo contra el fallo del superior, no puede decirse que hay cantidad líquida y reconocida por dicho Sr. Robleda: que no procedió el carácter ejecutivo con arreglo al Código (arts. 1649 y 1006, Código de procedimientos). Que el auto citado de 29 de Setiembre dictado por el juez 1º, ha venido con notorio error y contra lo dispuesto en el Código (art. 1638, Código de procedimientos) á desnaturalizar el curso del negocio y á decidir sobre la forma del juicio, y que usando del derecho que le dá el art. 1497 de dicho Código, apelaba de él para ante el Tribunal Superior.

El último documento aducido por el Sr. Robleda en el término de prueba, es un testimonio de la escritura de 13 de Abril de 1867, por lo que consta que la Sra. Dª Ana Furlong, viuda de D. Cándido Guerra, como administradora legal de los bienes de su menor hija Dª Manuela Guerra y el Sr.

D. Alejandro Arena celebraron una sociedad universal.

Diversos considerandos se tuvieron presentes y constan en el preámbulo de esta escritura, todos ellos beneficios para la menor heredera del Sr. Guerra.

Se estipuló en la cláusula 12ª que el término de la duracion de la compañía sería forzoso, y que se disolveria el dia 31 de Julio de 1872, ó antes si moria alguno de los socios.

En la 20ª se convino, en que si durante la compañía ó con motivo de su liquidacion al disolverse, se suscitaba entre los socios alguna diferencia, fuera lo que fuese, se someteria previamente á la decision de un árbitro arbitrador, amigable componedor, nombrado por las partes, si estuviesen de acuerdo en el nombramiento ó en caso contrario por dos, nombrando cada uno el suyo y un tercero que los dos árbitros elegirán para el caso de discordia, lo que se efectuaría dentro de seis dias desde su aceptacion si estuvieren conformes en la persona; que de no ser así decidiria la suerte.

En la 22, que el laudo que el árbitro ó árbitros, y el tercero pronunciaran en su caso, se ejecutaría, sin admitir en contra ninguna excepcion; pues desde entónces se comprometian las partes, á estar y pasar por él, renunciando la reduccion á albedrío de buen varon; el recurso de nulidad, el de revision y cualquiera otro que pudiera competirles.

En la 23, que el tercero en discordia al fallar, podria hacerlo en los términos que creyera justos, sin quedar obligado á adherirse al fallo de alguno de los árbitros.

Bajo las veintitres condiciones que constan en dicha escritura, de las que el que suscribe ha asentado las que tienen relacion en su concepto con el presente recurso de amparo, se estableció la nueva sociedad universal la Sra. Dª Ana Furlong de Guerra, como administradora legal de los bienes de su menor hija la Sra. Dª Manuela Guerra,

y el Sr. D. Alejandro Arena por su propio derecho.

El que suscribe, cumpliendo con la prevencion de la circular de 24 de Enero de 1842, ha formado el extracto de todos los documentos que constan en este juicio de amparo. Talca molesta, pero indeclinable de su parte.

Pasa ahora á encargarse del punto único sometido á la competencia de este juez 2º de Distrito, á saber: si la respectable 1ª Sala del Tribunal Superior de Distrito, al dar entrada al recurso de casacion interpuesto por D. Alejandro Arena contra varios capítulos del laudo arbitral y casar siete de las partidas de dicho laudo, violó el art. 14 de la Constitucion, por haber dado efecto retroactivo á las disposiciones que cita el fallo, de los Códigos civil y de procedimientos. Pero ántes sáale permitido al promotor fijar ciertos precedentes de la opinion que tiene, y no omitir ciertos puntos de doctrina jurídica emanados de las leyes. Así, en cuanto á las facultades de los árbitros sienta el Dr. Alvarez este principio: "*Quidquid a tempore, loco re contraversa conventionis comprehensum, vel lapsu utique disceserint arbitri sententia, pronulo, vacuo, insani, reputamus omni jura.*" Este principio está sancionado por las leyes 26, 27, 32, tít. 4º, part. 3ª y 4ª, tít. 25, lib. 4º, R. C., que es la ley 4ª, tít. 19, lib. 11º de la Nov. Recop.

Que es tambien punto incontrovertible, que los casos omitidos se deciden por el derecho comun, segun una regla de derecho.

Que en todo juicio no se puede conocer la verdad, sino atendidas las circunstancias del hecho, segun otra regla de derecho.

Los fundamentos del recurso de amparo interpuesto por el Sr. Robleda son: Que la sentencia del Tribunal Superior ha violado en la persona de la señora su esposa, Dª Manuela Guerra, la garantía del artículo 14 de la Constitucion.

Porque ha juzgado y sentenciado por el

Código de 15 de Setiembre de 1872, un hecho anterior;

Porque ha aplicado una ley posterior, que afecta y altera esencialmente el hecho mismo;

Porque con la aplicacion de la ley posterior ha violado la fé de los contratos y herido un derecho legítimamente adquirido.

El que suscribe no debe entrar en la controversia de interpretacion jurídica, acerca de la inteligencia que deba darse á las palabras del artículo 14, de que nadie puede ser juzgado ni sentenciado. Podrá ser exacta la interpretacion que los muy ilustrados jurisconsultos Sres. Castillo Velasco y Montiel y Duarte, lo mismo que el no menos entendido Sr. Dublan han dado á esa locucion. Respeto, como debo, su opinion. Al ministerio que desempeño incumbe única y exclusivamente examinar si en efecto hubo aplicacion retroactiva de una ley posterior, á actos anteriores á dicha ley, en virtud de los que la Sra. Guerra de Robleda adquirió derechos que estaban ya fuera del alcance de la nueva ley.

En teoría parece de aplicacion fácil el principio de jurisprudencia universal, de que las leyes no tienen efecto retroactivo; principio consignado como una de las garantías de nuestro derecho público, en el artículo 14, ya citado, de la Constitucion vigente de 1857. Pero en cada caso que surge, se tropieza con no pocas dificultades para deducir racional y legalmente, si una nueva ley hiere ó no derechos anteriores á su sancion y publicacion.

Abranse y registrense los diversos tratadistas acerca de esta materia; consúltense las diversas y contradictorias resoluciones de los tribunales que citan; examínense las distinciones de sus contrapuestas opiniones, y deberemos confesar que es muy difícil la materia, y que es preciso examinar, analizar y comparar los hechos segun el tiempo en que pasaron, segun sus incidentes y segun la época en que fueron consumados. Y

aun así, es muy expuesta á error nuestra opinión.

Del cúmulo de doctrinas que ha podido consultar el que suscribe, ahora, si no con mucha anterioridad, ha encontrado que la gran dificultad en esta materia consiste en esta sencilla pregunta: ¿qué es lo que debe considerarse por derecho adquirido?

Está bien que el signo menos equívoco de la retroactividad de una ley sea cuando ataca los derechos que se encuentran adquiridos; pero antes es preciso probar que se había adquirido un derecho de una manera irrevocable, que se había consumado un acto, y que por lo mismo no entraba ya en el dominio de la nueva ley el alterarlo ó rescindirle.

¿Cuál es, pues, el hecho anterior que ha juzgado la respetable 1ª Sala?

Haré uso de su informe, diciendo: que no fué ni la escritura de 13 de Abril de 67, ni la de 3 de Enero de 72 por las que dieron las partes potestad al árbitro ó arbitrador para determinar la controversia que existiere entre ellas, ni hicieron el nombramiento de estos. El compromiso vino por la escritura de 1ª de Agosto de 1872, en aquellas solo había promesa.

La Sala al examinar esas tres escrituras tomó en consideración la esencia de las obligaciones consignadas en dichos documentos. Y como se pasó el plazo que se fijó al tercero en la escritura de 1ª de Agosto para pronunciar su laudo, quedó sin efecto lo convenido.

Este es un hecho que no admite duda. De aquí es inconcuso que no existía un hecho consumado por decisión que le hubiera dado fuerza legal y sujetara á lo decidido á las partes concordantes. Vínculo que las sujetara: hecho que debía respetar la nueva ley como consumado bajo el régimen de la que regia cuando tuvo su efecto.

Pero no se hallaba el compromiso en ese caso, puesto que las partes y el árbitro tuvieron necesidad de celebrar la junta de 10 de Diciembre de 1872, en la que confirma-

ron el compromiso contraído y prorogaron el plazo de seis meses. Por esto ha dicho la respetable 1ª Sala, y en concepto del que suscribe muy bien, que, desde la junta de 10 de Diciembre tomó el compromiso, por voluntad de las partes, su fuerza y su valor legal, y emanó la jurisdicción con que se pronunció el laudo.

Mailher de Chassat, haciéndose cargo de cómo debe entenderse y hasta qué límites debe circunscribirse la retroactividad expresa, enseña: que el medio mas seguro para fijar las incertidumbres en que abunda esa materia, es determinando rigurosamente los límites de lo que se llama *derechos adquiridos*, para llegar de esta manera á fijar el verdadero carácter del efecto retroactivo: *porque toda ley que obra sobre lo pasado, no es por esa sola circunstancia retroactiva; es preciso que ella hiera, lastime derechos definitivamente adquiridos por los individuos á quienes correspondan.*

Y mas adelante, citando á otro autor, toma de esto lo siguiente: "Todos los negocios que estuvieren terminados, en cuanto á su esencia, antes de la nueva ley, y bien que su cumplimiento y sus efectos dependan de un hecho que deba realizarse después de la ley nueva, han de colocarse en el número de las cosas pasadas y *juzgadas* según las leyes anteriores, y no por la ley nueva, á menos que el estado de estos negocios no permita rectificarlos y terminarlos en el sentido de la nueva ley."

Hasta el día 10 de Diciembre de 1872 nada se había decidido; no había acto consumado. Desde esa fecha en adelante, supuesta la voluntad de las partes, tuvo un nuevo ser el compromiso que había caducado por el lapso del tiempo, quedando nuevamente conferida al tercero, jurisdicción para decidir según las cláusulas convenidas por las partes, puesto que aquella había dejado de existir por el lapso igualmente del término que se le señaló para pronunciar su laudo.

El compromiso era, en efecto, un hecho; la voluntad de las partes no puede ponerse en duda, de que no era otra que sus diferencias se terminaran por un árbitro, conforme á las bases convenidas. «Venía,» es cierto, este compromiso, de tiempos anteriores, según la modificación que iban teniendo los intereses de las partes contratantes; pero al advenimiento de la ley de 15 de Setiembre de 1872, se hallaba dicho compromiso sin fallarse, y por lo mismo ninguno tenía un *derecho adquirido* porque nada se había consumado; compromiso que, por el estado que guardaba, podía rectificarse y terminarse en el sentido de la nueva ley.

Como los tribunales no juzgan de las leyes sino conforme á las leyes; como el artículo de la ley transitoria con que se publicó el Código de procedimientos, previno que la sustanciación de los negocios pendientes se sujetara á dicho Código en el estado en que se encontraran el día 15 de Setiembre de 1872; y como el de que se trata en el presente recurso de amparo, se hallaba pendiente á la publicación de la ley, obró la 1.<sup>a</sup> Sala en la órbita de sus atribuciones, sin retroactividad al fallar como lo hizo, según las prescripciones del Código de procedimientos, no obstante que se tratara de un negocio comenzado con anterioridad.

Ni puede decirse que fué arbitraria en esta parte; porque aun suponiendo sin conceder que la sociedad «Guerra y Arenas» tuviera el carácter de mercantil, hay que considerar, como lo consideró dicha Sala, que no habiendo en la Ordenanza de Bilbao, Código vigente de comercio, prevenciones algunas que normen la sustanciación de los negocios, corresponde seguirlos según el derecho común, y porque donde la ley no distingue, no debemos distinguir, tanto más que es de interpretación restrictiva toda ley que por su especialidad se aparta del derecho común, y en el Distrito su derecho común, son los Códigos civiles y de procedimientos.

En el cuaderno impreso que corre en ca-

te expediente «Laudo arbitral pronunciado, etc.» consta á la pág. 16 de dicho cuaderno, el párrafo siguiente:—«Es cierto que las «confesiones hechas ante los árbitros, tienen «el mismo valor que las hechas ante el Juez «competente (artículo 1291, Código de proc.) «pero sin entrar en la discusión de si los «Sres. Landero y Sobrino tenían el carácter de árbitros, ó solamente de liquidadores; el hecho es, que la aceptación por parte del Sr. Arena, de todas ó algunas de las «observaciones á que nos vamos refiriendo, «no estuvo revestida de las solemnidades de «una confesión judicial, y no aparece en «otra forma que la de un simple apunte del «Sr. Landero, etc.»

Hé aquí una decisión del Sr. juez árbitro fundada en uno de los artículos del Código de procedimientos, tomando en cuenta las solemnidades que el mismo Código exige para reputar una confesión como judicial; esta cita prueba que el mismo juez árbitro estuvo en la persuasión de la ley á que debía normar sus procedimientos y tener presente era el Código citado.

No encuentra el Promotor que haya incurrido en la violación del artículo 14 de la Constitución la 1.<sup>a</sup> Sala, al juzgar y sentenciar, como se asienta por el Sr. Rebleda, conforme al Código de 15 de Setiembre de 1872, un hecho anterior.

Tampoco encuentra violación por el segundo capítulo, referente á que la aplicación que se hizo de la ley posterior, afecta y altera esencialmente el hecho mismo, por lo que pasará á manifestar.

La Sala tan no alteró la esencia del contrato, que para casar, «como casó,» siete partidas del laudo, examinó cual era, según el compromiso, lo que sujetaban los contratantes á la decisión del árbitro, y hasta donde pudo, según el compromiso, extendiendo la jurisdicción que le confirió; no alteró las bases del compromiso ni menos la nulificó; y no entiende, el que suscribe, qué se ha querido expresar con la frase del *hecho mismo*. Se dice, por último, que con la

aplicacion de la ley posterior, violó la fé de los contratos ó hirió un derecho legítimamente adquirido.

Examinando los tres puntos referidos, en los que se hace consistir la violacion, pueden concretarse á esta proposicion. La Sala, al aplicar al presente caso la ley de procedimientos de 15 de Setiembre de 1872, violó una de las garantías que otorga la Constitucion, porque dió fuerza retroactiva á esta ley, atacando un derecho adquirido.

Ya ha manifestado el que suscribe, que por derecho adquirido entienden los autores á que se ha referido, un hecho definitivamente juzgado. Pero toda la fuerza, el punto esencial en que se hace consistir el recurso de amparo contra el fallo de la 1ª Sala, es que, renunciado por los contratantes el recurso de nulidad, el de apelacion, el de reduccion al arbitrio de buen varon, y cualquiera otro, no pudo el Sr. Arena introducir el recurso de casacion del laudo, infringiendo así el compromiso; y que al dársele entrada y decidirse, se violó la garantía expresada.

Si antes de la publicacion de la ley de 1872 hubiera pronunciado su laudo el juez árbitro, y el Sr. Arena hubiera introducido el recurso de nulidad, tendría alguna fuerza la objecion, pero cuando aun en esa fecha estaba pendiente el negocio y no fallado, quedó por el art. 1º de la ley transitoria sujeto al Código de procedimientos, porque los actos posteriores debían regirse según dicha ley, y así lo entendió el juez árbitro sin contradiccion de los mismos interesados. Y no hay que escandalizarse de esta opinion, porque el mismo principio tutelar de la no retroactividad, consignado en la ley romana 7 del Cód. de legibus; "*Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta preterita revocari*," agrega como excepcion: "*Nisi nominatim et de preterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit*." Allí, dice un comentador: *nondum transactis seu judicatis*.

Esto supuesto, si la ley posterior abrogó el recurso de nulidad sustituyendo otro recurso más amplio, más tutelar de los derechos de los interesados; si no se habian decidido por el árbitro los puntos de controversia sujetos á su jurisdiccion, ¿cómo pudieron subsistir los efectos de la renuncia extendiéndolos á una época en la que no tenia ya vida este recurso por haberlo abrogado una nueva ley? Y acerca de esta cuestion son muy expícitas la opinion y las decisiones de varios Tribunales franceses que decidieron y establecieron como principio, "*que las leyes del día en que el juicio fué renunciado, son las que fijan su naturaleza y arreglan la manera y los plazos para atacarlos*." Según estas aplicaciones prácticas de tal principio, por tribunales competentes en la materia, no podría nuestra jurisprudencia, que sin amor propio nacional podemos decir, que se haya á la altura de la de las naciones más civilizadas, apartarse de tales principios.

La Sala, al hacerse cargo en su informe de la renuncia de los interesados del recurso de nulidad, expone diversas razones que en concepto del que suscribe fundan no solo la legalidad de sus procedimientos, sino la jurisdiccion expedita, para casar sin temor de retroactividad las siete partidas del laudo arbitral.

Abolida por la ley nueva el recurso antiguo de nulidad, sustituyéndolo con el más amplio y favorable de casacion, pudo tomarlo en consideracion cumpliendo con lo prevenido en el art. 1º de la ley transitoria, porque el juicio aún se hallaba pendiente y lo comprendia la ley. Y esta excepcion del principio de la no retroactividad, es de mayor aplicacion cuando, como dice Voet comentando la ley 7 del Código de legibus. "*Quod potissimum fit, si favorabilia legibus novis constitutus, quæ ad casus etiam presentes, sed necdum decisos aut transactione sopitos extendi iniquum non est; favorabilibus scilicet ampliandis*."

El presente recurso de amparo, no es de aquellos en los que á primera vista, ó con

ligero exámen, puede decidirse en determinados sentidos. Es un negocio complejo, que abraza puntos delicados de jurisprudencia, debatidos y sostenidos en juicio por abogados notables; decididos por un juez árbitro, honrado, inteligente y eficaz: fallado contra varios de sus capítulos por un Tribunal Superior y por último que afecta á personas estimables, no ménos que á sus intereses.

Si por acaso se ha deslizado al promotor que suscribe alguna apreciacion, que bien mire al fondo del negocio, ó á la inteligencia de los fundamentos expuestos por el Sr. Robleda para introducir el recurso de amparo, no ha sido ni pedido ser sino como una preferencia indispensable, y no como una revision de lo decidido, ni ménos con la intencion de disminuir la fuerza y valor legal de las razones aducidas por el señor quejoso. No ha debido á Dios el que suscribe el privilegio de abrazar en pocas palabras materia tan complicada: pero ha debido por razon de su ministerio, estudiar y meditar hasta donde le ha sido posible, á fin de que su opinion, sino fuere acertada, tenga al ménos la presuncion de que procuró que lo fuera.

Por cuanto lleva expuesto el que suscribe: por cuanto consta de los documentos aducidos y que corren en este expediente: por cuanto ha expuesto la 1ª Sala en su informe con relacion al punto de la retroactividad que se objeta á su fallo, concluye pidiendo al juzgado se sirva declarar:

Que la Justicia de la Union no protege ni ampara al Sr. D. Felipe Robleda, contra el fallo de la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito fecha 21 de Setiembre del corriente año, por el que decidió, que fué legalmente interpuesto por D. Alejandro Arena el recurso de casacion contra el laudo del juez árbitro en el juicio que éste siguió con D. Felipe Robleda, como marido de la Sra. Dª Manuela Guerra, causando dicho laudo en las siete partidas que expresa el superior fallo,

porque al conocer y decidir como conoció y decidió, no hizo aplicacion retroactiva, al hecho, comprendiéndolo en las disposiciones de los Códigos civil y de procedimientos que es la ley comun vigente."

A vd. señor juez, corresponde en su notoria ilustracion, decidir lo que entendiéramos conforme á derecho.

México, Octubre 25 de 1875.—*J. B. Beltran.*

*Sentencia del Juzgado 2º de Distrito.*

México, Octubre 27 de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Felipe Robleda, en representacion de su esposa Dª Manuela Guerra, contra la resolucion de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito, admitiendo el recurso de casacion promovido en el juicio arbitral que el quejoso ha seguido contra el C. Alejandro Arena, á virtud de reputar violada con tal resolucion de dicho Tribunal la garantía que consigna el art. 14 de la Constitucion; visto el informe rendido por la autoridad responsable; las pruebas presentadas; lo pedido por la parte fiscal; y visto en fin lo que tenerse presente convino. Atendiendo á que la violacion de garantías que en el presente caso se pretende efectuada, se hace consistir en la retroactividad con que se ha hecho aplicacion del Código de procedimientos; pues siendo el recurso de casacion establecido por ley posterior á al en que se celebró el contrato, á efecto del cual la decision arbitral debia cumplimentarse sin interposicion de recurso alguno (cláusula 2ª adicional de la escritura de 1º de Agosto y de fecha 3 de Enero del mismo año de 1872), es incuestionable el ataque de derechos legítima, anterior é irrevocablemente adquiridos, y

Considerando, primero: que con arreglo á la expresa y terminante prevencion del art. 14 constitucional "no se puede expo-



dir leyes retroactivas, ni juzgarse y sentenciarse sino con aplicacion de las expedidas con anterioridad al hecho de que se trate;" que por efecto retroactivo en la aplicacion de una ley, y por infraccion del art. 14 que se invoca, se entiende toda resolucion que muere ó varíe en perjuicio de la persona, objeto de ella, derechos legítima y anteriormente adquiridos.

Considerando, segundo: que de las pruebas rendidas y demas constancias de autos, aparece suficientemente comprobado: que con anterioridad á la vigencia del Código de procedimientos y á virtud del contrato expreso, la parte del quejoso, como una de las contratantes, obtuvo el derecho legítimo é irrevocable de que la resolucion arbitral causaria ejecutoria, sin que la interposicion de recurso alguno, ni la intervencion de autoridad cualquiera, pudiese variar ó suspender los efectos del laudo que se pronunciase.

Considerando, tercero: que de las mismas pruebas y constancias mencionadas resulta plenamente justificado: Primero: que con anterioridad al Código de procedimientos (escrituras de 3 de Enero y 1º de Agosto de 1872), se celebró un contrato entre el quejoso y la parte del C. Alejandro Arena, para sujetar á arbitraje las diferencias existentes entre ellos, en los puntos que la misma escritura designaba. Segundo: que por contrato se convino en que la resolucion de los árbitros ó la del tercero nombrado en caso de discordia, seria definitiva é irrevocable, sin que de ella pudiese establecerse recurso de ninguna especie, comprendiéndose los determinados y cualquier otro. Tercero: que pronunciado el laudo respectivo, y al cumplimentarse éste, la parte del C. Arena contra el tenor del repetido contrato, interpuso el recurso de casacion, que fué admitido por la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito.

Considerando, cuarto: que de lo expuesto resulta haberse hecho aplicacion por el citado Tribunal superior, de una ley poste-

rior, el Código de procedimientos, en perjuicio de derechos legítima, anterior é irrevocablemente adquiridos, que son los resultados del convenio expreso celebrado el 1º de Agosto de 1872.

Considerando quinto: que aun cuando entre los documentos exhibidos como prueba aparece el de fojas 89 que es la certificacion de un convenio celebrado en 10 de Diciembre de 1872, entre la parte del quejoso y la del C. Arena, esto, sin embargo, no importa la falta de retroactividad que de ellos se pretende deducir, pues tal acta ó convenio no es sino la simple aclaracion en la forma de un procedimiento, al parecer no detallado con precision por la primitiva escritura de arbitramento, y respecto á cuya aclaracion se expresó no implicaba novacion ó modificacion alguna, circunstancias que es evidente que hacen quedar en perfecto rigor, subsisten y con su antelacion todos y cada uno de los derechos adquiridos á virtud de los contratos primitivos de 3 de Enero y 1º de Agosto de 1872.

Considerando sexto: que la retroactividad prohibida por el artículo 14 de la Constitucion, y consignada como garantía individual, tiene lugar no solo en la aplicacion de ley posterior á hechos anteriores, sino que tambien se efectúa con relacion á toda determinacion, auto, ley ó resolucion dictada por cualquiera autoridad, si con ello se destruye ó varía la naturaleza de un contrato anterior, pues en tal caso hasta los derechos meramente espectativos ó facultativos, se hallan tambien fuera del alcance y dominio de toda ley posterior. "La expectativa que resulta de un contrato, dice Escribá (Diccionario de la legislacion; palabra "Efecto retractorio," Párrafo 4º) está siempre fuera de tiro de las leyes posteriores, "pues que todo contrato forma un vínculo "legal que pone á los que lo suscriben en "la necesidad de dar ó hacer aquello á que "se han obligado."

Considerando séptimo: que tratándose, como en la presente cuestion se ha tratado,

de un convenio de arbitraje en que por sus diversas cláusulas se renunció expresamente á todos los recursos legales subsistentes á su fecha, y á los que pudieran establecerse en lo futuro, pactándose además, una forma especial en los procedimientos, dándose un carácter de meros peritos ó contadores á los árbitros, y excluyéndose de hecho la intervencion de la autoridad judicial; por todo ello es incontestable que la resolucion posterior del Tribunal del Distrito, por la que se dió entrada y admitió un recurso, si bien creado por el Código hoy vigente, comprendido en las cláusulas de renuncia, ataca la naturaleza de un contrato anterior en perjuicio y daño de los derechos legítimos, anterior irrevocablemente adquiridos por el quejoso; y debiendo por último tener presente: que sin embargo de lo manifestado por la repetida 1ª Sala del Tribunal Superior en su informe respectivo, consta que el ciudadano juez árbitro tercero en discordia, no se determinó ni señaló plazo alguno para la decision ó laudo; y que del quejoso no puede decirse haya consentido en manera alguna y en perjuicio de sus derechos, á la interposicion del juicio de amparo, con el hecho de haber sostenido ante los tribunales comunes los derechos relativos al recurso de casacion, porque consta de la certificacion que obra en los autos, que hizo la protesta de ocurrir al juicio de amparo si la resolucion judicial admitia la casacion, puesto que con ello se violaría una garantía individual.

Por tales consideraciones, pues, se declara: que la justicia de la Union ampara y protege á D. Felipe Robleda, contra la resolucion de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito por la que se admitió la casacion intempestiva del laudo á que el presente juicio se ha referido, por violarse con tal resolucion la garantía individual que consigna el art. 14 de la Constitucion Federal, invocado por el quejoso. Hágase saber, publíquese y previa citacion del ciudadano promotor fiscal, elévense estos autos en re-

vision á la Corte Suprema de Justicia. As lo firmó y lo proveyó el ciudadano juez 2º de Distrito, Lic. J. M. Canalizo.—Doy fé.—*J. M. Canalizo.*—*Fernando Zamora,* secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 9 de 1875.—Visto el juicio de amparo interpuesto por el C. Felipe Robleda, en representacion de su esposa la Sra. Dª Manuela Guerra, ante el juzgado segundo de Distrito de esta capital, contra una sentencia pronunciada por la primera sala del Tribunal Superior del Distrito, que casó siete números del laudo arbitral que Don Joaquín García Yeasbalzeta pronunció como tercero en el juicio de liquidacion de cuentas y disolucion de la sociedad Guerra y Arena, con cuya sentencia del Tribunal, considera el quejoso que se violó el art. 14 de la Constitucion en virtud de haber pactado los referidos socios no interponer recurso alguno del laudo que pronunciase el árbitro, sujetándose á él en todo, bajo la pena de una multa de \$, 10.000 que pagaría el que infringiese ese pacto; visto el informe producido por la primera sala del Tribunal Superior, acompañando copia certificada de la sentencia de casacion que pronunció; las pruebas rendidas por el quejoso; así como las que á pedimento de la parte de Arena, rindió el ciudadano promotor fiscal: el pedimento de este funcionario, la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente.

Apareciendo de autos: que tanto en la escritura de Enero de 1872 como en la de 1º de Agosto del mismo año, los socios Guerra y Arena convinieron solemnemente en sujetar todas sus diferencias al laudo que pronunciara un tercero, nombrado de comun acuerdo por los contadores de ambas partes, bajo la pena de \$10.000 que pagaría en calidad de multa el contrayente que infringiese

ese pacto: que en 10 de Diciembre del mismo año 1872, citados á junta los interesados por el árbitro, levantaron ante él, una acta en que sin afectar la esencia de lo convenido por ellos en la escritura de compromiso y con la expresa declaración de que ese acto no innovaba en manera alguna su contrato, facultaron al árbitro para que practicasen ciertas diligencias.

Que pronunciado el laudo con posterioridad, la parte de Arena interpuso el recurso de casación, contra varios puntos del mismo laudo; y la parte de Robleda sin haber consentido este recurso manifestó interpondría el de amparo por la infracción del art. 14 Constitucional, como lo ha verificado, una vez que el Tribunal Superior pronunció su sentencia de casación: y

Considerando: Primero: que los derechos que las partes adquirieron en virtud de las escrituras de un contrato solemne, fueron un hecho anterior á la vigencia del Código de procedimientos de 15 de Setiembre de 1872.

Segundo: que en la junta que tuvieron los contrayentes el 10 de Diciembre del mismo año de 1872, ante el árbitro Icasbalzeta, no pactaron cosa diferente que afectara la esencia del convenio reiterado, pues antes bien, asentaron de una manera expresa, que no importaba esa junta novación alguna en el pacto solemnemente convenido.

Tercero: que al declararse por el Tribunal Superior del Distrito en la sentencia contra la que ha pedido amparo el C. Robleda, que ha lugar á la casación conforme al Código de procedimientos; se aplicó por ese Tribunal una ley posterior á un hecho anterior, privando al C. Robleda de un derecho adquirido en virtud de un contrato solemne y perfecto, dándole efecto retroactivo al Código é infringiendo con este acto el art. 14 constitucional.

Por estos fundamentos se declara:

Primero: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez segundo de Distrito de esta capital, que declaró que la justicia de la unión ampara y

protege al C. Felipe Robleda, como representante de su esposa la Sra. Doña Manuela Guerra, contra la sentencia de la primera sala del Tribunal Superior del Distrito que falló, que había lugar á la casación interpuesta por Don Alejandro Arena, y que casó los números 7, 15, 50, 67, 28, 64 y 65 del laudo arbitral pronunciado por Don Joaquín García Icasbalzeta.

Segundo: Lo acordado.

Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José Arteaga.*—*José M. Lozano.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramires.*—*E. Montes.*—*J. M. Vigil.*—*Miguel Sandoval.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa* Secretario.

Es copia que certifico.—México, Noviembre 12 de 1875.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido por los Sres. Elorza y Mendía ante el juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa, contra el C. administrador de rentas de Mazatlan, que se niega á recibirles en moneda de cobre, el pago que hacen por derechos de consumo y contribución federal.*

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, evacuando el último traslado que previene la ley en los juicios